



RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD, RELATIVA A LA SOLICITUD, PRESENTADA POR [REDACTED] AL AMPARO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO (001-039396).

Con fecha 27 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el registro del Ministerio de Hacienda y Función Pública la solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por [REDACTED].

Con fecha 27 de noviembre de 2019 esta solicitud se recibió en el Real Patronato sobre Discapacidad, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

La solicitud se formula al amparo de lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y solicita determinada información referida al Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA). En relación con la información solicitada, se señala lo siguiente:

El artículo 24 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas crea el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, señalando que *“El Gobierno, oído el Consejo Nacional de la Discapacidad, regulará en el Real Patronato sobre Discapacidad este centro...”*. El Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, establece en su artículo 14 que el CESyA *“...se constituye en un centro asesor y de referencia...”* del Real Patronato sobre Discapacidad (RPD).

El artículo 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que los *“...sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información...”* a que se refiere ese artículo. El artículo 1 se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de la norma y no se refiere a órganos concretos de un ente público, sino a *“c) organismos autónomos...”*. En este caso, el CESyA no tiene personalidad jurídica propia, ni pública ni privada, por lo que no le es de aplicación la mencionada norma, que sí lo es al Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, del que el CESyA tiene la condición de centro asesor.

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por [REDACTED], en los siguientes términos:



a) Contratos: el CESyA no tiene personalidad jurídica propia, por lo que no puede ser parte de un contrato. Los contratos del RPD se pueden consultar en la página web de la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado.

b) Convenios suscritos y encomiendas de gestión: el CESyA no tiene personalidad jurídica propia, por lo que no celebra convenios. Los convenios anuales del RPD con la Universidad Carlos III por los que se canaliza una subvención para el CESyA se pueden consultar en la página web de la Base Nacional de Subvenciones. No constan encomiendas de gestión al CESyA.

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios: las que se mencionan en el apartado anterior se conceden a la Universidad Carlos III y no al CESyA, y se pueden consultar donde se ha señalado. No constan más ayudas públicas.

d) Los presupuestos: no hay presupuesto propio del CESyA. El del RPD se puede consultar en la Ley General de Presupuestos de cada año.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan: no existe obligación específica del CESyA de rendir cuentas anuales o de presentar auditorías.

f) Las retribuciones e indemnizaciones, resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad: el CESyA no tiene personal propio.

g) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que define cada administración competente: no consta.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.


Director